

¿Dónde quedó la bolita?

A diferencia de 1985, cuando la ruta de donativos privados apuntó a bodegas o cuentas concentradoras abiertas por el gobierno, tras los estragos del sismo del 19 de septiembre del año pasado la ayuda institucional privada fluyó por sus propios cauces, tantito por evitar su uso político y tantito por desconfianza. El caso es que mientras de cara a estos apoyos está fluyendo la transparencia, los que se canalizaron hacia el sector público vía nacional o internacional siguen en el terreno de lo incierto.

Lo más grave aún es que la posibilidad de construir casas habitación o centros comunitarios por parte de privados la ha obstruido el propio gobierno. Así, lanzada por el Grupo Carso del magnate Carlos Slim una iniciativa para recaudar fondos al cinco a uno, es decir, por cada peso del público cinco del conglomerado, se integró una bolsa de 2 mil 628 millones de pesos, de los cuales sólo se han podido canalizar 184 millones 982 mil pesos.

Así, aunque el CitiBanamex en alianza con la Fundación Alfredo Harp, la de Coca-Cola y la de Televisa plantearon la construcción de 200 casas nuevas en distintos municipios de Morelos, hasta hoy sólo están listas 38 en Yautepec. El banco, vía un escenario uno por uno, logró recaudar 58 millones de pesos con la mira en las siete entidades más afectadas, es decir, incluyendo Oaxaca, Chiapas, Puebla, Estado de México, Guerrero y la Ciudad de México.

En total existen 154 fondos institucionales que no han logrado entregar parte de los recursos colectados. Así, el Fideicomiso Fuerza México creado por el Consejo Coordinador Empresarial, que tiene aún en caja 286 millones, y la Fundación Alberto Bailleres, con 99. En la larga lista están también la Fundación Holcim México, con 19.6 millones pendientes, la Fundación Grupo México, con 9.8 y la Alista, con 116.4.

Según el Servicio de Administración Tributaria, existen 580 fondos que han entregado mil 594 millones de pesos a las zonas afectadas, pero los informes son tan vagos que en algunos casos ni siquiera se conoce a qué entidad federativa se canalizaron. Tampoco se puede distinguir bien a bien en que conceptos se entregó ayuda en especie. Aunque el gobierno calculó en 38 mil 163 millones de pesos el costo de la reconstrucción, de acuerdo con Transparencia Mexicana no hay forma hasta hoy de demostrar el gasto. Tampoco hay una lista oficial de lo recopilado por donativos provenientes del extranjero, aunque en la larga lista están desde el gobierno ruso hasta estrellas de la farándula y empresas multinacionales.

En la cumbre de lo absurdo, el gobierno de la ciudad ni siquiera cuenta con un censo comprobable sobre damnificados, mucho menos la cuantificación de los daños. Aunque el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México afirma haber entregado ayuda de renta a 2 mil 399 personas afectadas, se escatima el padrón y el monto. Un año después, alumnos de mil 900 escuelas públicas estudian en aulas

improvisadas y más de la mitad de la población afectada sigue viviendo en campamentos. ¿Dónde quedó la bolita?

Se calienta CNA. Pian pianito se está reforzando la posibilidad de que Vicente Gómez Cobo, empresario lechero, sustituya a Bosco de la Vega en la presidencia del Consejo Nacional Agropecuario. Este tiene ya el apoyo no sólo del gremio, sino de las organizaciones de productores de proteína animal. La convocatoria para la asamblea electoral se debía publicar en abril, retrasándola a pretexto de no alterar al equipo negociador del TLCAN.

COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Septiembre 18 del 2018

Ni bancarrota, ni Banxico mafioso

El último pleito público que tuvieron un presidente y un gobernador del Banco de México (Banxico) se dio durante la administración de Felipe Calderón, cuando él y su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reclamaban al titular del banco central, Guillermo Ortiz, la prevalencia de tasas de interés en niveles altos que entorpecían la recuperación económica. Al final el banco central, con todo y críticas, mantuvo su política monetaria restrictiva y logró el objetivo de controlar la inflación. Felipe Calderón simplemente no postuló a Ortiz Martínez para un segundo mandato y por el contrario, impulsó a Agustín Carstens. Fue aquel un episodio muy positivo, porque el banco central dejó ver el valor de su autonomía y de su misión exclusiva de combatir la inflación, aun en contra de lo que pensara el propio presidente de la República.

El exabrupto del fin de semana del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es otra cosa. De entrada, hay un marcado desconocimiento de la condición económica de este país. O bien, una calculada intensión de presentar un escenario catastrófico. Preocupa, y mucho, que el próximo presidente de este país diagnostique que la economía de México esté en bancarrota. Hoy López Obrador tiene a su disposición toda la información sensible y secreta de las entretelas del poder y desde esa posición lanza una declaración de ese tamaño. Eso es algo preocupante.

Lo cierto es que los mercados ubicaron estas palabras más en la arenga de la plaza pública más que en el terreno serio del diagnóstico. El peso ganaba y las bolsas también, y no mostraban ninguna preocupación por ese supuesto estado de bancarrota nacional. Lo que debe angustiar es que la gente que le sigue ciegamente recibe un mensaje que puede turbar sus planes económicos y provocar una profecía autocumplida de crisis. Para otros sectores, debe tomarse en cuenta que, de manera adelantada, el próximo gobierno esté buscando responsables ante la eventual ocurrencia de una crisis económica, derivada de las políticas que se apliquen el próximo sexenio.

López Obrador lo tiene todo, tiene el poder, tiene a los diputados y a los senadores, no hay oposición que se le pare enfrente con posibilidades de frenar cualquier

decisión que le plazca. Por lo tanto, le faltan chivos expiatorios. Es entonces cuando en este país que ve en la supuesta bancarrota, aparece la figura de un posible responsable: el Banco de México.

La diferencia pública entre Calderón y Banxico, incluso el agarrón que se dieron en privado el gobierno de Peña Nieto y el propio banco central fue por temas realmente de competencia del Banco de México. Fue por diferencias de enfoque en la política monetaria.

El mandato casi exclusivo del banco central mexicano es preservar el poder de compra de la moneda, combatir la inflación pues. No está entre sus facultades la política financiera, como presume el presidente electo. Es un hecho que conforme avance el sexenio, el Banco de México podrá ir diluyendo la autonomía con la sustitución programada de los integrantes de la Junta de Gobierno. Acabarán los mandatos y podrán llegar integrantes a modo. Pero por lo pronto invocar una bancarrota inexistente de la economía mexicana y situar al Banco de México del lado de la mafia del poder, capaz de provocar una crisis en el futuro que impida que López Obrador cumpla con muchos de sus planes, corre en contra del sentido común.